

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1501

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2017

(02 NOV 2017

Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra la Resolución 1060 del 11 de agosto de 2017, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de las señoras Ana Rita Ulabarry Stella Guerrero Fajardo, Esperanza Ulabarry y María Isabel Mosquera Secue.

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR FINANCIERO Y TRANSPARENCIA**

En uso de las atribuciones legales y, en especial, de las conferidas en el artículo 108 y en el literal b) del numeral 5 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, en el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015, en el numeral 9° del artículo 11.2.1.4.10. del Decreto 2555 de 2010, adicionado y modificado por el artículo 3 del Decreto 1848 del 15 de noviembre de 2016, en el numeral 1 del artículo 3 y en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO - Que mediante la Resolución 1060 del 11 de agosto de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia a través del Superintendente Delegado para Protección al Consumidor y Transparencia, ordenó entre otras, a las señoras Ana Rita Ulabarry con cédula de ciudadanía No. 25.365.195, Esperanza Ulabarry con cédula de ciudadanía 31.539.109 y María Isabel Mosquera Secue con cédula de ciudadanía 25.364.748 "...en su calidad de partícipes, promotoras y receptoras de dineros del público en la pirámide conocida como "CADENA" o "TELAR" según se expuso en el acto administrativo, así como al esquema piramidal, bajo apremio de multas sucesivas hasta por \$1.000.000.00 cada una, la **SUSPENSIÓN INMEDIATA** de las operaciones de captación o recaudo de dineros bajo la modalidad de captación ilegal conocida como "pirámide", en virtud de la cual se vincularon al menos ciento once (111) personas quienes entregaron cada una la suma de doscientos mil pesos (\$200.000), a la espera de recibir ganancias hasta de cinco millones seiscientos mil pesos (\$5.600.000) derivadas de los dineros que entregarán los demás afiliados. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 del EOSF, en armonía con lo consagrado en el artículo 90 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."

En consecuencia, dicha orden "(...)supone para las destinatarias de la misma, la imposibilidad de realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, en forma masiva, usando cualquier modalidad

Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 1060 de 2017.

contractual, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas”.

SEGUNDO. Que el referido acto administrativo¹, fue notificado personalmente el dieciocho (18) de agosto de 2017 a las señoras Ana Rita Ulabarry con cédula de ciudadanía No. 25.365.195, Esperanza Ulabarry con cédula de ciudadanía 31.539.109 y María Isabel Mosquera Secue con cédula de ciudadanía 25.364.748, tal y como se lee en la constancia elaborada para el efecto que obra en los antecedentes de la actuación administrativa y fue dado a conocer a la ciudadanía mediante la publicación que se hizo de la parte resolutive del mismo en la edición del 27 de agosto de 2017 del diario La República, en atención a lo previsto en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo.

En la diligencia de notificación personal como en el artículo noveno de la parte resolutive de la citada Resolución objeto de la publicación referida, se advirtió, que contra dicho acto administrativo procedía únicamente el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para Protección al Consumidor Financiero y Transparencia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la respectiva notificación, esto es, hasta el cuatro (4) de septiembre de 2017.

TERCERO - Que las señoras Ana Rita Ulabarry, Esperanza Ulabarry y María Isabel Mosquera Secue, por intermedio de su apoderado el Dr. MARIANO ALEXANDER MEDINA LOBOA identificado con C.C.1.062.292.590 y con T.P.279306 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, presentaron un escrito en la ventanilla de correspondencia de esta Superintendencia el pasado ocho (8) de septiembre (número de radicación 2017031093-033-000) con el objeto de interponer “RECURSO DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN” en contra de la Resolución 1060 del 11 de agosto de 2017, para lo cual el doctor Medina Loba anexó copia del poder a él otorgado presentado ante Notario.

CUARTO –. Que en el subnumeral 7.2. del numeral 7° del Capítulo II, Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, se establece como requisito de admisibilidad de los recursos de reposición contra actos de la Superintendencia Financiera de Colombia, que estos se interpongan dentro del plazo legal, esto es, el previsto en el artículo 76 del CPACA.

QUINTO - Que de acuerdo con el artículo 78 del CPACA², el rechazo de un recurso procede cuando el escrito mediante el cual se formula el mismo no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 77 ibídem.

SEXTO - Que previo a resolver de fondo el recurso de “REPOSICIÓN Y APELACIÓN”, esta Entidad en uso de las atribuciones legales y constitucionales, procederá a revisar el cumplimiento de la regulación general sobre la procedencia y trámite de los recursos incoados, así:

6.1. De los recursos interpuestos.

6.1.1. Teniendo en cuenta lo anterior, debe recordarse que en materia de los recursos que proceden contra los actos administrativos que impongan una medida cautelar ante la demostración de una captación o recaudo masivo de recursos del

¹ En relación con el cual se expidió el comunicado de prensa el 27 de agosto de 2017, cuyo texto además fue publicado en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera de Colombia No.418 del 23 de agosto de 2017

² Art. 78: Rechazo del recurso: “si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo....”

Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 1060 de 2017.

público con fundamento en lo ordenado en el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, tema que derivó en la adopción de la medida administrativa contenida en la Resolución No. 1060 de 2017, en el artículo 335 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se establece que: "(...) sólo procederá el recurso de reposición interpuesto en la forma establecida en el Código Contencioso Administrativo.

Las medidas cautelares y de toma de posesión que en ejercicio de sus funciones adopte la Superintendencia Bancaria serán de aplicación inmediata. En consecuencia, el recurso de reposición que proceda contra las mismas no suspenderá la ejecutoriedad del acto administrativo³. (Subraya fuera de texto)

Por su parte, en el literal l) del numeral 4 del artículo 208 del citado Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se estableció que respecto de las: "(...) decisiones a que alude el artículo 335 del presente estatuto, procederá únicamente el recurso de reposición." (Subraya fuera de texto).

Por lo expuesto, contra la Resolución 1060 de 2017, sólo procede la interposición del recurso de reposición, siendo forzoso rechazar el subsidiario de apelación presentado por los solicitantes en el escrito que nos ocupa.

Así mismo, debe tenerse presente que a las voces del numeral 7, subnumeral 7.2, Capítulo II, Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, modificado por la Circular Externa 10 de 2016, sobre los requisitos de oportunidad y presentación de los recursos de reposición a interponerse ante esta Entidad, está señalado que "Los recursos de reposición contra actos de la SFC deben interponerse dentro del plazo legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del CPACA, y recibirse exclusivamente por la Secretaría General de esta Superintendencia.

La presentación del recurso debe ser personal ante el Secretario General o ante otra autoridad que esté facultada por la ley para tal efecto (juez o notario) pero, en todo caso, el término dentro del cual debe presentarse sólo se interrumpe por el recibo del recurso por parte de la SFC y la consecuente anotación de su presentación en el registro que lleva la Secretaría General..."

Ahora bien, en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), se señala lo siguiente:

"(...) ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

Artículo 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.

³ En la actualidad Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 1060 de 2017.

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio⁴.

6.1.2. Corresponde a este Despacho determinar si se cumplen los requisitos señalados en las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción, para lo cual es necesario precisar lo siguiente:

Una vez evaluada la forma en que fue presentado el recurso de reposición contra la Resolución número 1060 de 2017, se estableció que el mismo fue radicado en esta Entidad sólo hasta el día 8 de septiembre de 2017, bajo el radicado 2017031093-033-000 es decir, cuatro (4) días después de vencido el término legal de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. En efecto, para el caso de las señoras Ana Rita Ulabarry, Esperanza Ulabarry y María Isabel Mosquera Secue, el plazo máximo para presentación de dicho recurso de reposición venció el día 4 de septiembre de 2017, según lo previsto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual se concluye que el recurso se presentó fuera del término legal.

6.1.3. Además, procede que se tenga presente, según consta en el expediente, que el escrito del recurso de reposición se radicó en la ventanilla de correspondencia de esta Superintendencia con el número 2017031093-033-000 del 8 de agosto de 2017, y que en el mismo o en documento anexo no consta la acreditación o diligencia de presentación personal que las recurrentes debieron realizar ante la Secretaría General de la Superintendencia Financiera de Colombia o la autoridad notarial o judicial, requisito previsto en el artículo 77 del CPACA y en el numeral 7.2 del Capítulo II, Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia⁴.

Por lo expuesto, procede el rechazo del recurso de reposición interpuesto por las señoras Ana Rita Ulabarry, Esperanza Ulabarry y María Isabel Mosquera Secue, en razón a que su presentación no cumplió con los requisitos legales de procedencia, oportunidad, ya señalados.

SÉPTIMO - Sin perjuicio de lo anterior y con el ánimo de brindar claridad plena a los sujetos procesales sobre los elementos fácticos y legales en los cuales se basa la medida administrativa impugnada, ésta Superintendencia procede a manifestarse frente a los motivos de inconformidad expuestos por los recurrentes, los cuales se concretan en los argumentos que a continuación se transcriben, en el mismo orden en que fueron presentados, seguidos de las consideraciones que cada uno de ellos le merecen a esta Superintendencia, así:

⁴ 7.2. Oportunidad y presentación: (...) "La presentación del recurso debe ser personal ante el Secretario General o ante otra autoridad que esté facultada por la ley para tal efecto (juez o notario) pero, en todo caso, el término dentro del cual debe presentarse sólo se interrumpe por el recibo del recurso por parte de la SFC y la consecuente anotación de su presentación en el registro que lleva la Secretaría General (...)"

Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 1060 de 2017.

7.1.1 Argumentos de los peticionarios

"(...) en el artículo primero de la ya mencionada RESOLUCIÓN, ordena la suspensión inmediata de la supuesta pirámide conocida como CADENA O TELAR, la cual fue suspendida desde el 02 de marzo de 2017..."

"(...) En el artículo segundo de la ya mencionada RESOLUCIÓN, ordena la devolución de la totalidad de los dineros recaudados por mis prohijadas, las cuales ya devolvieron su dinero en su totalidad los dineros captados por ellas..."

"(...) El artículo tercero, cuarto, quinto y sexto, ya se cumplieron pues el artículo tercero habla de la publicación de un diario de circulación nacional, y este ya se cumplió pues salió en BLUE RADIO, NOTICIAS CARACOL Y PROCLAMA CAUCA..."

"(...) En dicha resolución ordenan copia a la ALCALDIA DE CALOTO, para sus fines pertinentes, lo que quiere decir que está ya se cumplió pues en (sic) día que los funcionarios notificaron a mis representadas llevaron copia a la ALCALDIA DE CALOTO"

"(...) En el artículo octavo de la Resolución 1060 de 2017, le solicitan a la ALCALDESA DE CALOTO, que bajo su colaboración se dirija con el COMANDANTE DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO DE CALOTO, a cerrar estos lugares, esto no hubo necesidad de que se cumpliera, pues desde el 02 de marzo de 2017, la denominada pirámide llamada CADENA O TELAR, dejó de funcionar pues la señora STELA GUERRERO FAJARDO, no quiso devolver dichos dineros lo cual cerró la mencionada CADENA O TELAR"

7.1.2. Consideraciones de la Superintendencia Financiera de Colombia

Las medidas administrativas que impone la Superintendencia Financiera en materia del ejercicio ilegal de la actividad financiera, como la que fue adoptada en el caso bajo análisis, derivan de facultades consagradas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (artículo 108 y el literal d) numeral 1º del artículo 325), en concordancia con las previstas en el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008, norma con fuerza de ley expedida por el Gobierno Nacional para conjurar la crisis social generada en el país por parte de personas naturales y jurídicas que atentan contra el interés público protegido en el artículo 335 de la Constitución Política.

Debe recordarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia, las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público son de interés público y sólo pueden ser realizadas previa autorización del Estado. Así y conforme lo determina el literal d); numeral 1, artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es de competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia como organismo técnico de carácter administrativo: *"Evitar que las personas no autorizadas, conforme a la ley, ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas."*

En relación con el significado de tal intervención, la jurisprudencia ha señalado:

*"(...) el artículo 335 constitucional hace explícito el **interés público** de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y de cualquiera otra relacionada con el manejo, el aprovechamiento y la inversión de los recursos de captación y del ahorro privado, y en consecuencia estatuye que se ejercerán previa*

Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 1060 de 2017.

*autorización del Estado y conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.*⁵

Luego, la actividad de captación o recaudo de dineros del público, así como el manejo, administración e inversión de los mismos, en la medida en que tiene una connotación social y económica de impacto en la comunidad, sólo puede ser desarrollada por las entidades autorizadas expresamente por las autoridades competentes, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la ley; esto, debido a que el bien jurídico que se persigue tutelar con dicho ordenamiento es el interés público y la confianza en el sector financiero colombiano, presupuestos que obviamente prevalecen siempre sobre los intereses particulares.

Así las cosas, la conducta por la cual se impuso la medida administrativa a las señoras Ana Rita Ulabarry, Esperanza Ulabarry y María Isabel Mosquera Secue, mediante la Resolución 1060 de agosto de 2017, consistió en la recepción de dineros del público en forma masiva la cual quedó ampliamente explicada en el referido acto administrativo, en la cual se indicó:

(...) "con base en la información y documentación recaudada en la actuación administrativa, cuyos resultados se encuentran contenidos en el informe de visita No. 2017031093, rendido bajo la gravedad de juramento en los términos del numeral 3° del artículo 337 del EOSF, se evidenció que bajo la denominación "CADENA" o "TELAR" las señoras Stella Guerrero Fajardo, con cédula de ciudadanía No 25.364.649, Ana Rita Ulabarry con cédula de ciudadanía No. 25.365.195, Esperanza Ulabarry con cédula de ciudadanía 31.539.109 y María Isabel Mosquera Secue con cédula de ciudadanía 25.364.748, todas domiciliadas en el municipio de Caloto – Cauca, en calidad de partícipes, promotoras y receptoras de recursos, desarrollaron un esquema piramidal para captar dineros del público, mediante el cual, las personas que se adherían al mismo con la entrega de doscientos mil pesos (\$200.000), se comprometían a vincular al menos a otras dos personas que aportaran dicha suma individualmente y éstas a la vez a traer al esquema a otras dos (2) y así sucesivamente, con la promesa de recibir en un término de ocho días la suma de un millón seiscientos mil pesos (\$1.600.000) y de hasta cuatro millones de pesos (\$4.000.000) si entregaban adicionalmente un valor de seiscientos mil pesos (\$600.000) en un período de quince (15) días. "

"Los beneficios que las mismas pagaron a los participantes se derivaron únicamente de la captación de recursos aportados por los nuevos vinculados al esquema".

Como se observa, según la información recabada en la actuación y las versiones de algunos de los participantes, en la "CADENA" o "TELAR" se captaron recursos, al menos, por la suma de cincuenta y nueve millones ochocientos mil pesos (\$59.800.000), derivados de la participación de aproximadamente ciento once (111) personas, que vincularon a la pirámide a través de las gestiones realizadas por las personas sujetas de la medida administrativa contenida en la Resolución 1060 de 2017.

Ahora bien, con base en lo consignado en la Resolución 1060 de 2017, quedó plenamente confirmada la participación y promoción de las señoras Esperanza Ulabarry, Ana Rita Ulabarry y María Isabel Mosquera en el esquema piramidal

⁵ CORTE CONSTITUCIONAL, C-136 de 1999, 4 de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 1060 de 2017.

conocido como "CADENA" o "TELAR". En efecto, en el mencionado acto administrativo quedó claramente establecido que el modelo de negocio adelantado por las citadas señoras correspondía a una actividad de captación ilegal a través de una "pirámide", por las razones que se transcriben a continuación:

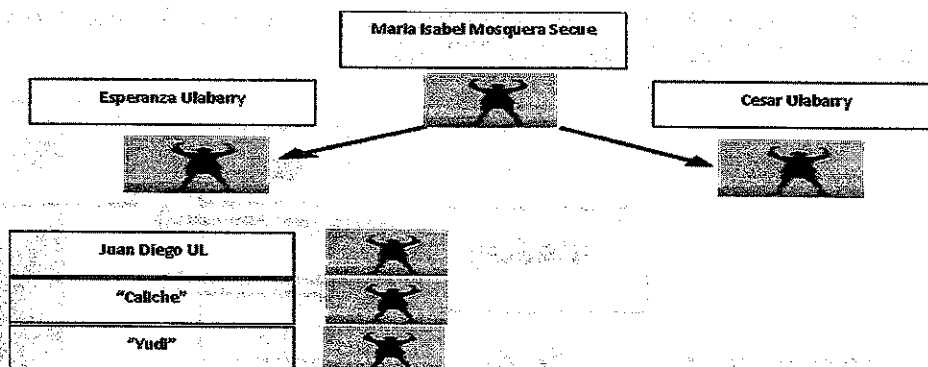
(..) **"De los promotores, partícipes y receptores de dinero en la denominada "CADENA" o "TELAR"**

"En la información aportada por las veintiún (21) personas que dieron testimonio bajo juramento, se identificó a las señoras Stella Guerrero Fajardo, con cédula de ciudadanía No 25.364.649, Ana Rita Ulabarry Zapata con cédula de ciudadanía No 25.365.195, Esperanza Ulabarry Zapata con cédula de ciudadanía 31.539.109 y María Isabel Mosquera Secue con cédula de ciudadanía 25.364.748, todas domiciliadas en el municipio de Caloto – Cauca o sus alrededores, como participantes, promotoras y receptoras de dineros en la "CADENA" o "TELAR", información que coincide con la entregada por las citadas personas en las declaraciones de parte. El detalle de la participación correspondiente es el siguiente:

• **Participación de la señora María Isabel Mosquera Secue**

"La señora María Isabel Mosquera Secue se vinculó inicialmente por invitación que recibió de una persona de Puerto Tejada y entregó la suma de doscientos mil (\$200.000) pesos, vinculando a su vez a los siguientes "brazos": Esperanza Ulabarry, Cesar Ulabarry, Juan Diego UL, "Caliche" y Yudi (sin apellido), de los que obtuvo una ganancia por valor de un millón seiscientos mil pesos (\$1.600.000), de los cuales entregó seiscientos mil pesos (\$600.000) con el fin de obtener una ganancia adicional de cuatro millones de pesos (\$4.000.000). Igualmente, la señora Mosquera Secue recibió dinero de la señora Ana Rita Ulabarry Zapata, en cuantía de cuatro millones de pesos (\$4.000.000).

"La siguiente imagen ilustra la participación de la señora María Isabel Mosquera Secue:



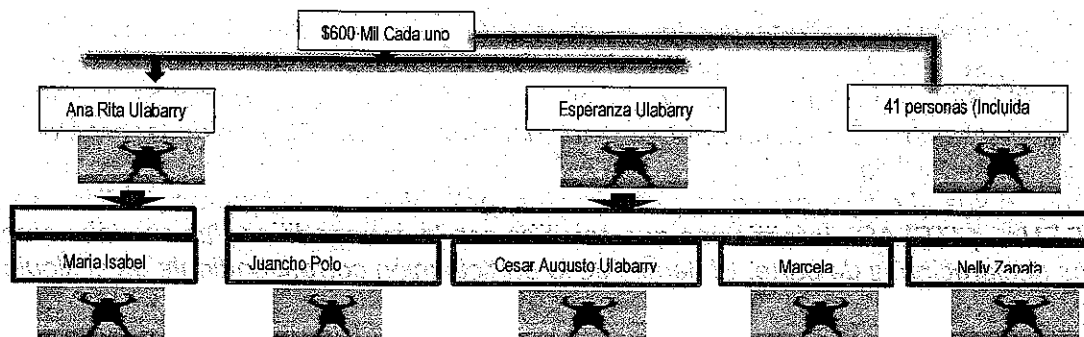
• **Participación de la señora Esperanza Ulabarry Zapata**

"Por su parte, la señora Esperanza Ulabarry se vinculó por la invitación que recibió de la señora María Isabel Mosquera Secue a la cual entregó la suma de doscientos mil pesos (\$200.000); esta señora vinculó como sus "brazos" a las señoras Stella Guerrero Fajardo y Jennifer Mora recibiendo doscientos mil pesos (\$200.000) de cada una como aporte inicial y recibió un millón de pesos (\$1.000.000) dejando quinientos mil pesos

Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 1060 de 2017.

(\$500.000) para el fondo de solidaridad y cien mil pesos (\$100.000) para abonar al fondo a devolver a los afiliados que no lograran cumplir los requisitos para optar a las ganancias prometidas.

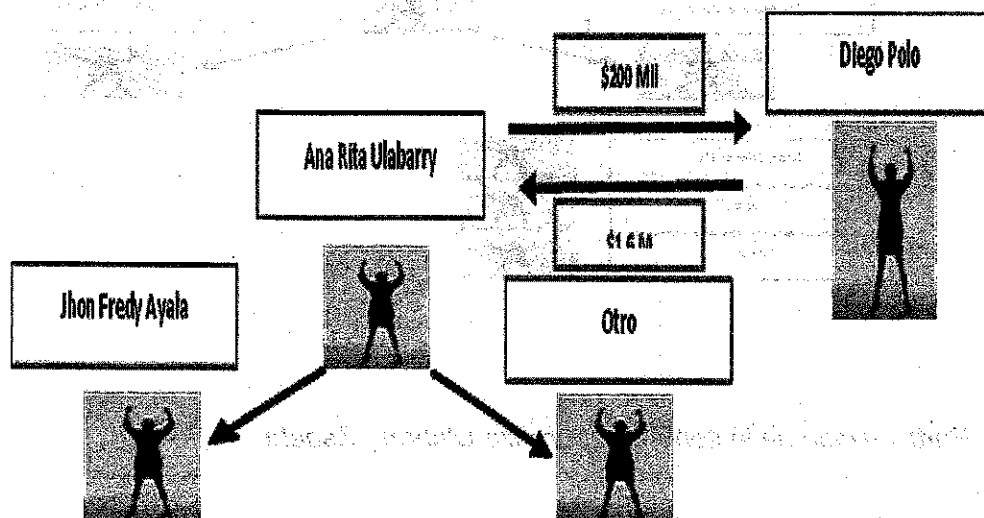
"Con los recursos obtenidos y con el fin de ganar cuatro millones de pesos (\$4.000.000), invirtió y promocionó el grupo de su hermana, la señora Ana Rita Ulabarry Zapata, a quien le entregó la suma de seiscientos mil pesos \$600.000. Veamos la estructura:



"La señora Esperanza Ulabarry Zapata informó que recibió la suma de cuatro millones de pesos (\$4.000.000), valor que afirma fue devuelto, sin adjuntar soporte para el efecto."

• Participación de Ana Rita Ulabarry Zapata

"La señora Ana Rita Ulabarry Zapata se vinculó por invitación del señor Diego Polo, a quien le entregó doscientos mil pesos (\$200.000) con el compromiso de vincular a dos personas más que aportaran cada uno doscientos mil pesos (\$200.000). Posteriormente, Ana Rita Ulabarry vinculó a dos "brazos", su hijo mayor John Fredy Ayala y a un amigo, de quien no se proporcionó el nombre. A los ocho (8) días, recibió lo prometido de parte del señor Diego Polo, esto es, la suma de un millón seiscientos mil pesos (\$1.600.000). Seguidamente, inició con seiscientos mil pesos (\$600.000) la cadena en compañía de su hermana Esperanza Ulabarry Zapata, con la finalidad de ganar cuatro millones de pesos (\$4.000.000).



"De las declaraciones recibidas por la comisión de visita quedó establecido que tanto la señora Ana Rita Ulabarry Zapata como Esperanza Ulabarry Zapata, captaron un total de veinticuatro millones (\$24.600.000); este monto corresponde a la suma de los aportes pagados por cuarenta y un (41) personas afiliadas, a razón de seiscientos mil

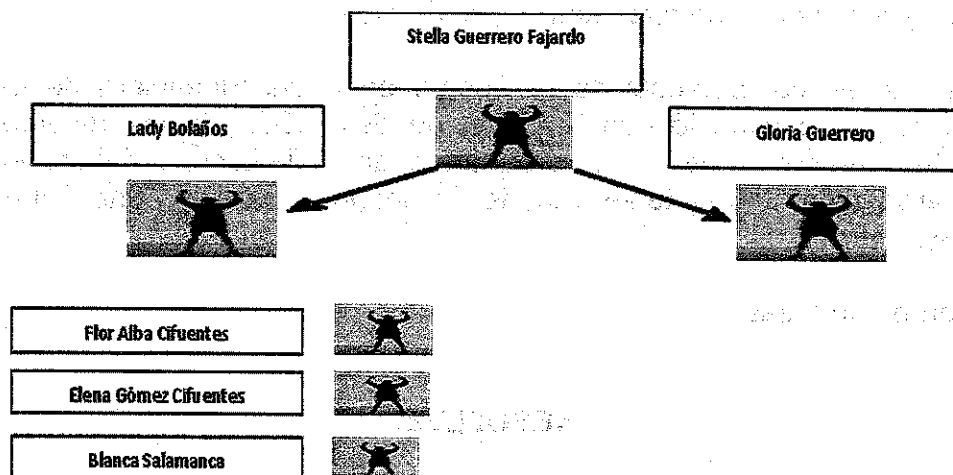
Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 1060 de 2017.

pesos (\$600.000) cada una, quienes a su turno, los entregaron con el fin de recibir la ganancia final de cuatro millones de pesos (\$4.000.000)."

"Las señoras Esperanza Ulabarry Zapata y Ana Rita Ulabarry Zapata, afirmaron que cinco (5) de las cuarenta y un (41) personas vinculadas por ellas, recibieron el valor prometido de cuatro millones de pesos (\$4.000.000): Juancho Polo, Marcela, Maria Isabel Mosquera, Cesar Augusto Ulabarry y Bertha Nelly Zapata, por lo cual aseguran que "devolvieron" la suma de veintiún millones cien mil pesos (\$21.100.000).

- Participación de Stella Guerrero Fajardo

"La señora Stella Guerrero Fajardo se vinculó inicialmente con doscientos mil pesos (\$200.000) por medio de su amiga, la señora Esperanza Ulabarry a quien le entregó dicho dinero, e informó que afilió a su vez a los siguientes "brazos": Lady Bolaños, Gloria Guerrero, Flor Alba Cifuentes, Elena Gómez Cifuentes, y Blanca Salamanca. Ocho (8) días después de su vinculación, recibió lo prometido por valor de un millón seiscientos mil pesos (\$1.600.000). Posteriormente, se vinculó con seiscientos mil pesos (\$600.000) a la cadena de las hermanas Ulabarry con la finalidad de ganar cuatro millones de pesos (\$4.000.000). Señala sin embargo la señora Guerrero, que no recibió ganancias de esta nueva participación.



"La participación que presentan en la "CADENA" o "TELAR", las cuatro (4) personas relacionadas anteriormente, se diferencia de la vinculación de quienes en el mismo esquema únicamente entregaron la suma de doscientos mil pesos (\$200.000) y no afiliaron más personas, en razón a que estas últimas en los términos del artículo 5 del Decreto 4334 de 2008, "tienen exclusivamente como relación con estos negocios el de haber entregado sus recursos."

"No ocurre lo mismo con las cuarenta y un (41) personas que vinculó la señora Ana Rita Ulabarry Zapata a la "CADENA" o "TELAR" a las cuales les pagó la suma de un millón seiscientos mil pesos (\$1.600.000) en razón a que afiliaron dentro de su "brazo" al menos a quince (15) personas más; no obstante, tales afiliados no se mencionan en la presente medida administrativa por cuanto no fue posible conocer sus nombres e identificaciones como tampoco su ubicación, lo cual no impide que sean sujetos responsables de la captación ilegal de dineros una vez sean individualizados por la Superintendencia de Sociedades en desarrollo del proceso de intervención administrativa previsto en el Decreto 4334 de 2008 y por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación penal por el delito que corresponda."

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO **1501** DE 2017

Hoja No. 10

Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 1060 de 2017.

OCTAVO.- Es procedente resaltar a título meramente ilustrativo, que los argumentos que fueron presentados sin cumplir los requisitos previstos en los artículos 76 y 77 del CPACA, no están dirigidos a desvirtuar la captación ilegal de dinero llevada a cabo por las señoras Ana Rita Ulabarry, Esperanza Ulabarry y María Isabel Mosquera Secue, a través del esquema piramidal conocido bajo la denominación de "CADENA o TELAR" tal como se describe en la Resolución 1060 de 2017. Por el contrario, reafirman la participación en el "TELAR" o "CADENA" de las citadas señoras, y hacen énfasis en que han dado cumplimiento a la parte resolutive del acto administrativo citado, por cuanto afirman y adjuntan la prueba de haber devuelto los recursos captados e indican que la pirámide no continúa funcionando, hechos que de manera alguna desvirtúan la responsabilidad de cada una de ellas por haber incurrido en una conducta prohibida por la ley.

Finalmente, cabe señalar que los argumentos expuestos según los cuales las citadas señoras devolvieron los dineros captados, compete analizarlos a la Superintendencia de Sociedades, autoridad que según lo prevé el artículo 4 del Decreto 4334 de 2008, es la competente, de manera privativa, para adelantar la intervención administrativa tendiente a disponer la organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de los recursos captados, luego que evalúe y apruebe las reclamaciones que presenten los ciudadanos que se consideren con derecho a reclamar tales dineros.

Por tanto, no es competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia confirmar si ya se cumplió con la orden de devolución de los recursos a los reclamantes y en consecuencia, se ordenará el envío de la copia del presente acto administrativo a la Superintendencia de Sociedades para los fines que estime pertinentes.

En este orden de ideas,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición interpuesto por el doctor MARIANO ALEXANDER MEDINA LOBOA identificado con C.C.1.062.292.590 y con T.P. 279306 como apoderado de las señoras Ana Rita Ulabarry, Esperanza Ulabarry y María Isabel Mosquera Secue, por haber sido presentado en forma extemporánea y sin el lleno de los requisitos establecidos para el efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el subnumeral 7.2 del numeral 7 del capítulo II, título IV de la parte I de la Circular Básica Jurídica, norma que establece como requisito de admisibilidad de los recursos de reposición contra los actos de la SFC, que estos se interpongan dentro del plazo legal, esto es; el previsto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente o subsidiariamente por aviso según lo establecido en el numeral 4 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicable por remisión expresa del artículo 15 del Decreto 4334 de 2008, al doctor Mariano Alexander Medina Loba con C.C. 1.062.292.590 y con

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1501 DE 2017

Hoja No. 11

Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 1060 de 2017.

T.P. 279306 en su calidad de apoderado de la señoras Ana Rita Ulabarry con cédula de ciudadanía No. 25.365.195, Esperanza Ulabarry con cédula de ciudadanía 31.539.109 y María Isabel Mosquera Secue con cédula de ciudadanía 25.364.748, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno, quedando agotada la vía gubernativa, por lo cual se entiende que este acto administrativo queda en firme una vez se surta esta notificación, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 87 del CPACA.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la remisión del presente pronunciamiento a la Superintendencia de Sociedades para los fines pertinentes, dentro del ámbito de la competencia que le confiere el Decreto 4334 de 2008.

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la remisión del presente pronunciamiento a la Fiscalía General de la Nación para los fines pertinentes, dentro del ámbito de competencia de tal Autoridad.

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera y en la página web de esta última Entidad.

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR la publicación de la parte Resolutiva de este acto administrativo en un diario de circulación nacional.

ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR copia de esta Resolución al Grupo de Registro de esta Superintendencia para los efectos pertinentes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá D.C., a los

02 NOV 2017

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR FINANCIERO Y TRANSPARENCIA**


BEATRIZ ELENA LONDOÑO PATIÑO

Revisó: JCTD
Proyectó AGR

